

Presentación

Los hechos de violencia y guerra que viene experimentando en los últimos años la sociedad colombiana, muestran, entre otras cosas, que la crisis social y el histórico conflicto armado son cada vez menos insoslayable para el conjunto del país. Por que la ampliación de la guerra ha implicado el marginamiento de la política, la anulación de lo público y la invisibilización de diversas formas de expresión social.

Un hecho que se constata frecuentemente es que el asunto del conflicto armado, los actos de la guerra, la lógica de la confrontación, dominan como en ningún otro momento el temario nacional y, en algunas ocasiones, eclipsan la acción de la política tradicional sobre los asuntos públicos. Es palpable el marginamiento de la política tradicional, de sus protagonistas históricos en Colombia (gobierno, "oposición", partidos políticos y cámaras legislativas) y de su iniciativa para abordar los asuntos de interés colectivo que están en juego como consecuencia de la guerra.

En lugar de esta clase política aparecen cada vez más los actores de la guerra, pero sin que éstos tampoco tengan claramente definido, al menos de frente al país, su posición en relación con los mismos temas; por ejemplo, qué valor le otorgan a los derechos colectivos e individuales inmersos en la guerra, qué respeto les merecen los pobladores urbanos y rurales no combatientes y qué responsabilidad les cabe y van a asumir en la degradación de una guerra en la que los medios hace mucho tiempo le disputan con éxito el lugar a los fines.

En esa misma medida, se hace cada vez menos visible la sociedad no armada ni involucrada en la guerra y, por esta vía, se abre camino la invalidación de lo público. Derechos, expectativas y declaraciones son ignorados o subvalorados

dado que los actores de la guerra definen arbitrariamente qué puede ser objeto de interés colectivo o público, qué asuntos no merecen tal reconocimiento y en qué condiciones se puede emprender una lucha por su defensa. En medio del conflicto, son los gestores de la guerra los que establecen, no definitivamente, el ámbito de lo público, definen sus límites y las obligaciones del ciudadano común en un entorno variable.

Pero la extensión de la guerra también tiene otros efectos igualmente importantes que no han sido considerados suficientemente en su magnitud. En la actitud aparentemente indiferente de guerrillas y paramilitares en relación con los actos desbordados de sus ejércitos se puede adivinar algo más que prepotencia o simple cálculo político. Es probable que el aumento de acciones independientes, inconsultas o encubiertas obedezca a una descontrolada autonomización de cuerpos armados, fenómeno posible en la escalada de un conflicto que lleva a sus gestores a resolver numerosas diferencias sociales por esta vía, extendiendo procedimientos, prácticas y parámetros de guerra a situaciones que no lo requieren. Los contornos de la guerra son cada vez más indefinidos y por sus intersticios se filtran intereses diversos que resultan articulados al conflicto armado.

Un fenómeno de efectos incalculables, sobre todo por la posibilidad que abre a la guerra civil, es que, como resultado del dominio de la lógica de la confrontación, los actores armados admiten cada vez menos la neutralidad, la imparcialidad, la intermediación o la valoración crítica de sus acciones realizada por la población no armada ni combatiente. Es claro que los ejércitos de uno y otro bando quieren encuadrar a la sociedad, la someten a una presión explícita o implícita obligándola a definirse en relación con el conflicto y con su participación en él.

Así como buena parte del campesinado colombiano ya empieza a acuñar la noción de “perseguidos” para describir su drama histórico, amplios sectores urbanos advierten el acoso que producen las medidas de ajuste económico y la intensificación de formas de violencia originadas en la denominada delincuencia común y en organizaciones armadas, que, a menudo, operan en conexión con guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas. Como consecuencia de la expansión de los actos de guerra, en la actualidad, en las ciudades, se está viviendo pues, y con una velocidad creciente, lo que desde hace varias décadas se sufre en el campo colombiano: la confusión, la incertidumbre, la persecución, el desarraigo ...; algo que, por lo demás, agrega elementos a la sensación individual y colectiva de desconfianza, miedo y desespero de los colombianos.

En medio de estas circunstancias se produce un efecto de rigidez y parálisis del que había hecho su propia interpretación Clifford Geertz en *La política del significado*, a propósito de aquellas sociedades que sufren grandes catástrofes internas mientras se realizan serios intentos por lograr un cambio histórico; o resultan esfuerzos voluntaristas, frágiles y efímeros que proclaman la necesidad de “la paz” sin advertir que tal valor tiene múltiples significados dependiendo del sector que lo reivindique o del grupo armado que realice acciones para “lograrlo”; porque estos grupos, desde luego, también declaran que “quieren” la paz, pero con distintos significados, a un costo diferente y a través de otros medios; o toman forma propuestas menos razonables que invitan a la guerra total, sin tener claro el costo social y los demás efectos catastróficos de una confrontación que rápidamente llevaría a la guerra civil.

Aunque estas sensaciones estén, cada vez más, en cada uno de los colombianos y circulando en los medios de comunicación masiva, no pueden ser los materiales básicos para construir una salida a la crisis que, más que coyuntural, es histórica. Es decir, las posiciones a que conducen no pueden sustituir la búsqueda de salidas negociadas, los esfuerzos mínimos de intermediación que requiere una sociedad cada vez más fragmentada así como la discusión y el estudio riguroso de las características y los efectos que gravitan en torno al conflicto.

De nuevo se convalida el papel y la función de los facilitadores, de los intermediarios, de los terceros; de la reflexión crítica que permita, a partir del debate académico, la descripción, la explicación y la comprensión del conflicto armado. Lo contrario sería abandonarnos a la guerra, a compartir las “razones” de los armados, a aceptar sus acciones contra la población no combatiente.

Precisamente porque creemos que todavía es posible presentar otros argumentos y encontrar mecanismos para una discusión racional en medio de la confrontación armada, el Instituto de Estudios Políticos, su revista *Estudios Políticos*, se compromete una vez más con la presentación de materiales útiles para una reflexión acerca de la política y del país.

Este número de *Estudios Políticos* presenta una reflexión acerca de los desplazados inscrita dentro del fenómeno estructural de la violencia colombiana. También incluye un trabajo sobre la relación entre políticas de seguridad ciudadana y control de la criminalidad en Colombia pero con base en un estudio específico sobre Medellín. Se presentan, desde la perspectiva historiográfica, reflexiones sobre el sujeto económico y la ciudadanía dentro de la concepción de los liberales radicales del siglo XIX colombiano. Igualmente se publican tres

artículos del área de filosofía política: uno referido a la *situación polémica* y al papel del *tercero* a partir de las reflexiones de Carl Schmitt, Julien Freund y Norberto Bobbio; otro artículo aborda una discusión acerca de las concepciones del Estado en Thomas Hobbes y Carl Schmitt; por último se publican algunas consideraciones sobre el tema del reconocimiento y las obligaciones morales.

Se trata, pues, de ofrecer más elementos críticos sobre asuntos que, desde una u otra perspectiva, guardan relación con la situación compleja que vive la sociedad colombiana.

Juan Carlos Vélez Rendón
Director revista *Estudios Políticos*
Agosto de 1999